

CRONICA DEL MES SEPTIEMBRE

Ernesto Cruz Alfaro

Por lo que respecta al mes de septiembre, los acontecimientos del panorama nacional estuvieron dominados por el golpe mortal que la ronda preparatoria de Panamá, primero, y luego el espectáculo gubernamental de Sesori, propinaron a la etapa de diálogo abierta el 1 de junio por la oferta de Duarte; mientras que, en el ámbito regional, el gobierno de Reagan prosiguió sus esfuerzos para implementar el financiamiento de los 100 millones de dólares para "los contras."

Desde los primeros días del mes, la presión popular en favor del diálogo experimentó un curso ascendente. El día 2, la UNTS solicitó formalmente a las partes su incorporación como observadora en la tercera ronda, y designó como delegados a tal efecto al secretario general de ANDES, Julio César Portillo, y al dirigente de AGEMHA, Ricardo Guevara. El día 4, los dirigentes Samuel Maldonado, de la Unión Comunal Salvadoreña (UCS), y Daniel Grimaldi, de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), expusieron en la "Cátedra de realidad nacional" de la UCA el apoyo de sus respectivas organizaciones al proceso de diálogo y exigieron a las partes que "antepongan los intereses del pueblo a los propios."

Este clima en favor del diálogo, sin embargo, se vio empañado por los fuertes enfrentamientos que la presencia de la Fuerza Armada en Sesori suscitó con el FMLN en las inmediaciones de la localidad. Voceros de la Tercera Brigada de Infantería confirmaron las versiones al respecto,

aunque se retractaron de la información luego que el general Blandón negara los combates. A su vez, 2 días después del desmentido de Blandón, COPREFA admitió que el ejército hacía operaciones en el área de Sesori para "limpiarla" de guerrilleros y "facilitar" el tercer encuentro de diálogo.

Además de las tensiones derivadas de los combates en torno a Sesori, la ronda preparatoria de Panamá estuvo precedida de una serie de declaraciones gubernamentales sobre temas que debían discutirse durante la reunión, pero acerca de los cuales el gobierno llevaba ya una posición inflexible. Apenas llegado a Panamá, la noche del 11 de septiembre, el vicepresidente Castillo Claramount enfatizó que "no está en discusión la desmilitarización de Sesori, como tampoco la cuestión de la seguridad. Lo que tenemos que discutir e incorporar a la agenda de trabajo es la voluntad de los subversivos para deponer las armas." La delegación revolucionaria, integrada por Ana Guadalupe Martínez, Salvador Samayoa y Jorge Villacorta, arribó a Panamá en la mañana del 12, aparentemente con una amplia voluntad de diálogo, pero también con una aguda conciencia de las dificultades que debían solventarse en la reunión.

La primera sesión del encuentro se inició a las 5:30 p.m. del 12, con la presentación de la agenda propuesta por el FDR-FMLN para el encuentro de Sesori. En sus puntos medulares, la agenda proponía la discusión de los mecanismos

para asegurar la continuidad del proceso de diálogo, la incorporación de otros sectores y la humanización del conflicto. El gobierno pareció flexibilizar su posición inicial; Castillo Claramount llegó incluso a decir que dichos contenidos le parecían "razonables" y adelantó que la agenda gubernamental no difería "en mucho" de la de los Frentes. El segundo día de sesiones concluyó con un aparente acuerdo sobre el contenido de la agenda a discutir en Sesori.

No ocurrió así con los aspectos de seguridad, abordados de lleno el 14. La delegación gubernamental se mantuvo inflexible en rechazar la tregua y la desmilitarización de Sesori. Castillo Claramount subrayó que la pretensión del FMLN de que la Fuerza Armada se retirara de Sesori buscaba querer mostrar un control territorial ficticio sobre la zona, y reiteró que "la guerrilla va a tener que aceptar la propuesta del gobierno porque no hay otra alternativa." En relación a la propuesta de una tregua, manifestó que, la Fuerza Armada podía comprometerse a una "suspensión de acciones militares" en las áreas por donde tuvieran que transitar los delegados rebeldes para dirigirse a Sesori el día del encuentro. Por su parte, los Frentes también se mantuvieron en sus exigencias. Salvador Samayoa lo formulaba así: "es absurdo pensar que vamos a celebrar una reunión de diálogo en una ciudad que está ocupada militarmente. Lo que estamos pidiendo es una cosa bien sencilla, y no entendemos por qué la posición tan cerrada del gobierno. Pedimos que Sesori no esté tomada por el ejército y algún compromiso para que cesen los disparos mientras haya diálogo."

A la vista del **impasse** sobre la cuestión de la seguridad, las delegaciones dieron por concluido el encuentro, sin entrar ya a discutir los mecanismos para la incorporación de otros sectores al proceso de diálogo. En un postrero esfuerzo por salvar éste de un colapso indefinido, el FDR-FMLN propuso una reanudación de las pláticas privadas en un plazo de 10 días. El gobierno rechazó la propuesta, si bien Rey Prendes manifestó que quedaban abiertas las puertas "para buscar en el futuro otros caminos para lograr la paz en El Salvador" y reiteró que la delegación gubernamental esperaba a los Frentes el 19 en Sesori. Los delegados revolucionarios, por su parte, **subrayaron que no asistirían a menos que el gobierno modificase su posición sobre la cuestión de la seguridad.** Monseñor Rivera, igualmente, indicó que tampoco asistiría a Sesori, pues su

presencia no tendría sentido si una de las partes no asistía.

Pese a la explícita decisión del FDR-FMLN y del arzobispo de no acudir a Sesori, Duarte se hizo presente el 19 en dicho lugar, acompañado de los presidentes de la asamblea legislativa y de la corte suprema de justicia, del ministro de defensa, el embajador Corr, el presidente de la conferencia episcopal (CEDES), Monseñor Revelo, y de otros funcionarios gubernamentales y miembros del cuerpo diplomático, entre quienes fue notoria la ausencia de los embajadores de los países de Contadora y de España. Como en anteriores manifestaciones progubernamentales, el gobierno movilizó desde el día anterior a aproximadamente 2 mil desplazados y campesinos provenientes de diversas cooperativas del sector reformado de San Miguel, Morazán y Cabañas, ante quienes Duarte reiteró con gritos desaforados su disposición a dialogar si el FMLN deponía las armas, mientras que Monseñor Revelo enfatizó con un virulento tono anticomunista de corte pre-Vaticano II que "la Iglesia nunca ha estado ni podrá estar con la guerrilla, porque yo soy católico y creo en Dios, mientras que ellos, al optar por la doctrina marxista-leninista, atea, están en oposición a mi convicción."

La actividad militar durante septiembre no se circunscribió al área de Sesori. Por el contrario, el 4, la Fuerza Armada inició la movilización más masiva de tropas a lo largo de la guerra, denominada "Táctica de las aguilas," la cual comprendió el desplazamiento de aproximadamente 20 mil efectivos en diversos operativos coordinados en los departamentos de Morazán, Usulután, San Miguel, San Vicente, Chalatenango y en la zona aleada al cerro de Guazapa, apoyados por 30 helicópteros artillados y una cuadrilla de aviones A-47. Aparentemente, sin embargo, la magnitud de la movilización y las nuevas tácticas implementadas en el curso de ella —según el comandante departamental de Morazán, coronel Mauricio Ernesto Vargas, entre esas tácticas estaba la implementación de "comandos de infiltración nocturna"— no impidieron la coordinación de diversos ataques por parte del FMLN, **incluso en zonas cubiertas por los operativos castrenses.**

El 5 de septiembre, unidades guerrilleras incursionaron en San Bartolomé Perulapía (Cuscatlán) y, al día siguiente, en Chinameca (San Miguel), donde permanecieron por más de 8 horas, luego de desalojar de sus posiciones a la

Guardia Nacional y a la defensa civil. Pocos días después, el accionar guerrillero quedó articulado en torno a la campaña "Por la independencia y la paz con dignidad," en el marco de la cual unidades de la BRAZ atacaron el 9 las posiciones del ejército en Cacaopera (Morazán), causándole 5 muertos y 15 heridos. El 12, el FMLN atacó una posición del batallón Atonal en la localidad de Nombre de Dios, jurisdicción de San Agustín (Usulután), causando 60 bajas y requisando una ametralladora 50, 6 fusiles M-16, un lanzagranadas M-79, un radio de comunicación militar y gran cantidad de munición. El mismo día, otras unidades guerrilleras atacaron el beneficio de café MECAFE, ubicado en Nejapa, causando 9 bajas a los efectivos que lo custodiaban.

El balance mensual de la actividad militar de septiembre alcanzó cotas superiores a los meses previos. Según Radio Venceremos, el FMLN habría causado al ejército 534 bajas, entre muertos y heridos, una de las cifras más altas del año, superada solamente por las bajas de junio, cuando el FMLN atacó la Tercera Brigada de Infantería. Sólo en el área de Morazán y San Miguel, según Venceremos, el FMLN causó en las filas castrenses, entre el 13 de agosto y el 24 de septiembre, 320 bajas, entre muertos y heridos (198 bajas en Morazán y 122 en San Miguel). Asimismo, el FMLN habría requisado 8 fusiles M-16 y destruido un helicóptero UH-1H y 4 camiones de transporte militar. Durante el mismo período y en la misma zona, según Venceremos, el FMLN habría sufrido 20 muertos y 14 heridos, y perdido 10 fusiles. Por su parte, COPREFA informó que, durante el mes, la Fuerza Armada causó al FMLN 145 bajas (77 muertos y 68 heridos).

Junto al desarrollo estrictamente militar de la guerra, el alto mando castrense prosiguió su campaña propagandística en favor del plan "Unidos para reconstruir," sin que los esfuerzos en esta línea lograran generar el consenso social pretendido por la Fuerza Armada. Después de oír la explicación del general Blandón, el clero encontró objeciones aún mayores que las formuladas por la empresa privada y los sectores laborales. Tales objeciones, según lo expuso Monseñor Rivera en su homilía dominical del 7, se referían fundamentalmente a las presiones ejercidas sobre la población para integrarla a la defensa civil y a la política discriminatoria de repoblación de desplazados, auspiciada por la Fuerza Armada. Fuese por el escaso eco obtenido por el general

Blandón en sus esfuerzos por propagandizar el plan, fuese por sus acervas críticas al divisionismo existente entre las fuerzas políticas, la presentación de "Unidos para reconstruir" a los partidos, el 24 de septiembre, ya no la hizo él, sino el general Vides Casanova, quien aseguró, frente a los reclamos de que el PDC estaba politizando el plan en provecho propio, que éste no era "un programa de la democracia cristiana ni de ningún partido político, sino una iniciativa de la Fuerza Armada para reconstruir lo que la subversión viene destruyendo desde hace 6 años."

Las medidas de política económica con que el gobierno enfrentó el deterioro de la economía no aportaron tampoco indicio alguno de que la crisis socio-política estuviese en vías de revertirse. El 4, el nuevo ministro de economía, Ricardo Perdomo, anunció la pronta integración de un Frente Económico Nacional (FEN), orientado a "unir a la iniciativa privada con los gremios laborales para contrarrestar las acciones destructivas de la guerrilla y ganar la guerra contra el comunismo." Perdomo se autocalificó simultáneamente como "defensor del bolsillo y de los intereses del pueblo" y "fiel defensor del mercado y de la iniciativa privada," y anunció posibles ajustes al programa de estabilización y reactivación económica y rebajas en el precio de las medicinas importadas y nacionales, así como en otros productos de consumo básico. La incoherencia interna de tal ideario no escapó al olfato de la empresa privada, la cual, por boca de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), manifestó que no participaría en el FEN por ser una instancia demasiado "amplia," y sugirió en contrapartida una comisión de alto nivel, integrada por el titular de economía, el presidente del Banco Central de Reserva y los representantes de la Cámara de Comercio e Industria, la Sociedad de Comerciantes e Industriales (SCIS) y la propia ASI, esto es, un organismo análogo al propuesto por Perdomo, pero del cual quedaría excluida la molesta presencia de los sectoreros laborales.

A nivel más pragmático, el gobierno anunció el 3 la implementación del "Proyecto siembra," por un monto de 150 millones de colones, los cuales serían distribuidos en forma de "facilidades crediticias" y otros "incentivos" a los productores de cereales afectados por la sequía. Al conocer dicho proyecto, otros sectores agrícolas se sintieron motivados a reiterar sus propias exigencias. Así, el 5, la Asociación de

Productores de Caña (PROCAÑA) demandó a Duarte la aprobación de un nuevo precio de garantía de 75 colones por tonelada cortada de caña para la cosecha 1986-1987, mientras que la Asociación Cafetalera (ASCAFE) solicitó a la fiscalía general investigar el manejo administrativo del INCAFE.

Junto a los problemas de los granos básicos, la caña y el café, también salieron a relucir los de la producción algodonera. El 17, el presidente del Banco Central de Reserva explicó a la comisión de economía de la asamblea legislativa que el algodón había dejado de ser un "cultivo rentable," pues la producción de un quintal-oro costaba 73 dólares, mientras que su precio en el mercado mundial era de sólo 45 dólares, lo cual representaba para el Estado un subsidio anual de 20 millones de colones "que ya no puede seguirse dando indefinidamente." En respuesta a las declaraciones del funcionario, la Cooperativa Algodonera (COPAL) admitió que los precios del algodón "han estado muy deprimidos en los últimos años," pero podrían recuperarse en el plazo de 2 años si se cumplían las proyecciones favorables en los precios mundiales y si se contaba con el apoyo gubernamental "adecuado."

En este marco de discusiones, el Dr. Morales Ehrlich, secretario ejecutivo del Comité Asesor de la Reforma Agraria (CARA), anunció el 11 que la segunda etapa del proceso de Reforma Agraria empezaría a implementarse a partir del mes de diciembre de 1986, según el plazo fijado por la constitución. Aunque las discusiones al respecto fueron opacadas relativamente pronto por la situación del proceso de diálogo con el FDR-FMLN, las furiosas reacciones de la derecha al anuncio de Morales Ehrlich bastaron para corroborar los persistentes rencores del gran capital contra las reformas iniciadas en 1980.

No obstante, según lo reconoció el propio Duarte al *New York Times* a mediados de septiembre, el mayor problema político que enfrentaba su gestión lo constituía el descontento social masivo generado por el deterioro de la economía y la espiral inflacionaria. La efervescencia alcanzada por el movimiento laboral a lo largo del mes aportó numerosas evidencias de ello.

El primer día de septiembre, 300 trabajadores de la subseccional sindical de CIRCA, afiliada a FENASTRAS, se fueron a paro, en demanda de diversas reivindicaciones socio-laborales. Tres días más tarde, 225 trabajadores

del sindicato de la Policlínica, afiliado también a FENASTRAS, asumieron una medida similar, por razones fundamentalmente idénticas a las del sindicato de CIRCA. En torno a estos conflictos, así como a la huelga de Inmobiliaria Molina S.A. (INMOSA), iniciada el 29 de agosto, empezaron pronto a gestarse otros focos de intensa lucha reivindicativa en Etiquetas y Elásticos, Búfalo, El Salvador Internacional, etc., lucha encaminada en todos los casos a presionar por aumentos salariales y/o reincorporación de trabajadores despedidos.

Como en situaciones anteriores, el Estado recurrió a la medida fácil de declarar ilegales las huelgas. El 5, el juzgado cuarto de lo laboral declaró ilegal la huelga de inmobiliaria Molina. Idéntica suerte corrió el 11 la de CIRCA y el 12 la de la Policlínica. Ello no obstó para que el descontento laboral llevara a medidas de hecho en otras empresas e instituciones, tanto del sector privado como del sector público. En éste, el 12, ANDES decretó un nuevo paro de labores a nivel nacional, en demanda del incremento salarial de 300 colones y del servicio médico-hospitalario solicitados desde varios meses atrás. El mismo día, los trabajadores afiliados a ASTTEL iniciaron un período de trabajo a desgano por tiempo indefinido hasta que sus demandas fuesen resueltas; entre ellas, ASTTEL solicitó un incremento salarial de 300 colones, reincorporación de 22 trabajadores despedidos, cese de la represión a los sindicalistas y la realización efectiva del diálogo nacional. El 19, el trabajo a desgano iniciado el 12 devino en paro a nivel nacional. El 18, la Asociación de Trabajadores del IRA (ASTIRA) inició un paro de labores de 2 días en San Salvador y de 3 en las demás agencias del país, en demanda de cumplimiento de la cláusula 50 del contrato colectivo de trabajo por la cual la institución se había comprometido a nivelar los salarios de los trabajadores permanentes. El 19, los trabajadores del ministerio de justicia rechazaron un aumento salarial de entre 40 y 100 colones, por considerar que no respondía a sus necesidades objetivas.

Algunos conflictos empezaron a solucionarse. Así, el 8 de septiembre finalizaron las huelgas de la Granja Avícola Marranada y de la Compañía Edificadora. El 17 finalizó la de Etiquetas y Elásticos, después que el sindicato y la patronal acordaron un incremento salarial de un colón por jornal y la reincorporación de todos los huelguistas sin aplicar descuentos. El 18 se so-

lucionó la huelga de la empresa avícola La Chacra. Asimismo, los trabajadores de ASTIRA suspendieron el paro tras obtener la promesa de las autoridades del IRA de que la nivelación de salarios se haría efectiva a partir del 29 de septiembre. La huelga de la Lotería Nacional, iniciada el 23, concluyó 3 días más tarde, tras la respuesta aparentemente favorable de la institución a las demandas del SITRALONB y de la Asociación de Vendedores de Billetes (ASEVBIL), quienes exigían el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y un aumento del 5 por ciento sobre el porcentaje vigente (20 por ciento) por la venta de los billetes de lotería.

La dinámica fundamental del panorama laboral, empero, estuvo también dominada durante la segunda quincena de septiembre por la generalización de las luchas reivindicativas y de los mecanismos de huelga. El 22, el Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales (CCTEM) exigió para todos los empleados públicos "un aumento general de salarios por un monto de 300 colones, 14 salarios al año, la construcción de un hospital debidamente equipado, y la continuación del diálogo con el FDR-FMLN." El 23, 6 sindicalistas de CIRCA, la Policlínica e INMOSA, junto a un representante de Dulces y Pastas Alimenticias, iniciaron una huelga de hambre a la cual se sumaron 2 días después otros 2 sindicalistas, uno de SOICSCES y uno más de INMOSA. La medida fue suspendida el 29 a petición de la Coordinadora de Solidaridad de los Trabajadores (CST) por los efectos que la abstinencia de alimentos estaba causando en la integridad física de los huelguistas. No obstante, la CST anunció que, en sustitución de la huelga de hambre, había paros progresivos hasta lograr que las demandas de los trabajadores fueran satisfechas. En el sector bancario, los trabajadores del Banco Central de Reserva, afiliados al SITRABIF, iniciaron el 26 un paro de labores para presionar por un aumento salarial del 40 por ciento, entre otras demandas. Reivindicaciones similares fueron planteadas por los trabajadores del Banco Salvadoreño, afiliados a SIGEBAN, y por los del Banco de Crédito Popular.

En medio de las discusiones sobre el diálogo, el recrudecimiento de la guerra, el deterioro de la economía, y la efervescencia laboral en ascenso, el 7 el PDC halló un espacio para celebrar su convención nacional, la cual contó con la participación de unos 198 delegados y la presencia

de las principales figuras del partido, entre ellas el propio presidente Duarte. La convención estuvo precedida de insistentes rumores sobre la manipulación que, en las convenciones municipales y departamentales precedentes, había realizado la "argolla" derechista del partido, aglutinada en torno al binomio Rey Prendes-Viera y al vicepresidente Castillo Claramount, para desplazar a los sectores más rogresistas de Chávez Mena y Morales Ehrlich. Efectivamente, la argolla se impuso, y Castillo Claramount sustituyó a Morales Ehrlich en la secretaría general del partido, mientras que Atilio Vieyetz, jefe de fracción ante la asamblea legislativa, fue desplazado del comité político y sustituido por Aristides Alvarenga.

Otro suceso político que pasó relativamente desapercibido, esta vez más por intereses positivos de la Fuerza Armada que por la inercia misma de los acontecimientos, fue el caso del coronel Elmer González Araujo, cuya participación en la masacre de Las Hojas y en una venta fraudulenta de municiones al ejército salvadoreño, sucesos ambos acaecidos en 1983, recordó el vicepresidente de *America's Watch*, Aryeh Neier, en la página editorial del *Washington Post* del 21 de septiembre. González Araujo se defendió como pudo, y lo hizo mal. En relación a la matanza de Las Hojas, respondió que lo ocurrido allí no fue una masacre, como "la izquierda ha pretendido hacer creer a la opinión pública internacional y nacional," sino una legítima "operación militar de contra-subversión, en base a una profesional planificación" orientada contra "terroristas totalmente desconocidos" y algunos miembros de ANIS, "en esa época dirigida por inescrupulosos y falsos líderes." Su involucramiento en el caso de las municiones fue en cambio un poco más espinoso, debido a las pruebas presentadas a finales de julio, por el propio gobierno norteamericano, contra la empresa Nordac Manufacturing Co., acusada de haber vendido a la Fuerza Armada salvadoreña, por intermedio de los coroneles González Araujo y Jorge Rivera, 18 millones de rondas de munición defectuosas de fabricación yugoeslava, merced a lo cual la Nordac habría obtenido ganancias adicionales por más de 1.5 millones de dólares, y los mencionados coroneles se habrían repartido 300 mil dólares en concepto de "honorarios." No obstante la gravedad de las acusaciones (los ejecutivos de la Nordac fueron condenados por la corte de distrito de Alexandria, Virginia, Estados

Unidos), Duarte informó a la prensa que en la mañana del día 23 había conversado "largamente" con González Araujo, y que nombraría una comisión de honor para investigar el caso. Misteriosamente, la prensa, luego de silenciar toda información relativa a la participación del otro coronel involucrado, Jorge Rivera, pronto se olvidó también de González Araujo.

En lo concerniente a la política exterior del gobierno salvadoreño, el mes de septiembre sólo aportó algunos retoques formales. El 6, el canciller Castillo Claramount juramentó como embajador de El Salvador ante el gobierno de Holanda, con sede en La Haya a Rafael Brizuela, hasta ese momento Director General de Protocolo y Ordenes de la cancillería. El 7, al asumir el cargo de secretario general del PDC, Castillo Claramount renunció a su puesto de canciller. El 8, Duarte juramentó como nuevo canciller al hasta ese momento vicecanciller, Dr. Ricardo Acevedo Peralta, quien subrayó que proseguiría la línea de política exterior impulsada por su antecesor, basada "en los principios de no intervención, soberanía y autodeterminación de los pueblos." En sus primeras declaraciones como nuevo titular de relaciones exteriores, Acevedo Peralta señaló que la asistencia de Estados Unidos a los contras "es una cuestión que sólo compete a los países interesados," pero "en todo caso, podemos dar apoyo moral a la política que desarrollan los países amigos."

Mientras en Nicaragua se desarrollaban los debates legislativos sobre el proyecto constitucional, el enviado especial de Reagan para Centroamérica, Philip Habib, realizó, entre el 8 y 10 de septiembre, una nueva gira por la región, presuntamente para obtener de los aliados de la Casa Blanca el consentimiento para que "los contras" fuesen entrenados en territorio centroamericano. El 26, la asamblea de Nicaragua aprobó los primeros 5 artículos del proyecto constitucional, relativos a la independencia y la soberanía, la democracia, el pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento.

Pese a los esfuerzos de democratización hechos por Nicaragua, el apoyo internacional no fue lo suficientemente unánime, como lo evidenció la VIII Cumbre de Jefes de Estado de los No Alineados, inaugurada el 1 de septiembre en Ho-

rare, Zimbabwe, y la reunión del Comité Regional de la Internacional Socialista, efectuada en Panamá el 25 y 26 del mismo mes.

En la inauguración de la cumbre, el primer ministro de Zimbabwe, Robert Mugabe, denunció el apoyo norteamericano a "los contras" y demandó enérgicamente "que se permita a Nicaragua seguir el curso del desarrollo socioeconómico que ha escogido;" no obstante, al discutir el proyecto de resolución relativo a Centroamérica y de elegir la sede para la IX Cumbre —los candidatos oficiales eran Indonesia y Nicaragua—, el apoyo moral y político de los no alineados a Nicaragua adoleció de algunas fisuras. En relación a la sede, la elección tuvo que ser pospuesta hasta la próxima reunión de cancilleres del movimiento. La solidaridad de la Internacional Socialista hacia Nicaragua fue aún más fría. En la mencionada reunión de Panamá, el comité regional de la organización emitió una resolución en la cual apoyaba "sin reservas" la neutralidad de Costa Rica frente a la demanda presentada por Nicaragua ante La Haya, acusando al gobierno de Arias de favorecer la agresión noreamericana al pueblo nicaragüense. Por otro lado, sin embargo, la Internacional Socialista rechazó la solicitud costarricense de que los representantes del FSLN no fueran convocados a las reuniones de la organización.

El 22 de septiembre, la asamblea general de la ONU inició su 41 período de debates, ocasión que los cancilleres de Contadora y del Grupo de Apoyo aprovecharon para reiniciar "nuevas iniciativas dentro del proceso de paz en Centroamérica y tratar de evitar que se cree un vacío político," según lo expresó el canciller peruano, Alan Wagner. En Harare, los no alieneados vacilaron a la hora de elegir entre Indonesia y Nicaragua para sede de la IX Cumbre del movimiento; en Panamá, la Internacional Socialista calificó de desmedida la demanda presentada por Nicaragua contra Costa Rica ante La Haya; en ninguno de los dos sitios, sin embargo, ni los no alineados ni la Internacional Socialista dudaron en condenar la ilegalidad de la agresión norteamericana a Nicaragua y respaldar los esfuerzos regionales de paz en el marco de Contadora. Un clima similar de opinión empezó a aislar al gobierno de Reagan, una vez más, en el seno de la ONU.